



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	C.I.U. Colombiana S.A.
DEMANDADO	Proyectos Negocios y Bienes S.A.S.
PROCEDENCIA	Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello
CUDR	05088-31-03-001–2021-00316-01
RADICADO INTERNO	012-23
PROVIDENCIA	081-23
DECISIÓN	La omisión de expresar los aspectos puntuales y concretos que deben soportar las razones de disenso contra determinada providencia, hace recurso ineficaz y que no pueda ser decidido, por tanto, deba declararse desierto. DECLARA DESIERTO RECURSO.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por el apoderado de la sociedad demandada frente a la decisión por medio de la cual se negó la práctica de la prueba por ella solicitada, por medio de la expedición de oficios y la realización de experticia, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello el nueve de diciembre de 2022.

ANTECEDENTES

1.- Precedentes fácticos. C.I.U Colombiana S.A. presentó demanda ejecutiva en contra de Proyectos Negocio y Bienes S.A.S., a continuación de proceso de restitución de bien inmueble arrendado, de manera que se librara mandamiento de pago por la suma de \$469.964.120, por concepto de 10 cánones de arrendamiento por valor de \$46.996.412 cada uno, causados desde el primero

de diciembre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, \$607.945.584, por los cánones causados desde el primero octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, por valor de \$50.662.132 cada uno, \$321.025.668, por los cánones del primero de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022, por valor de \$53.504.278 cada uno; además por \$47.753.422, por concepto de las costa aprobadas por el juzgado mediante auto del 27 de agosto de 2021, notificado por estados número 72 del seis de septiembre de la misma anualidad.

2.- Trámite y decisión apelada. El Juzgado de conocimiento libró orden de apremio en la forma solicitada mediante auto del siete de abril de 2022, siendo notificada la demandada personalmente el 16 de agosto de 2022.

Dentro del término del traslado, la ejecutada presentó escrito de excepciones, además solicitó como pruebas, entre otras, que se requiriera al perito evaluador designado en el proceso de restitución de bien inmueble, para que rindiera el respectivo dictamen que se le había encomendado, o en su defecto que se nombra nuevo auxiliar de la justicia, para que dictaminara sobre el valor de las inversiones plantadas en el inmueble ocupado en arrendamiento, para efectos de la explotación económica del mismo. Del mismo modo, deprecó que se oficiara a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para que certificara que personas naturales o jurídicas se han nombrado para CIU Colombiana S.A. desde el año 2017, con certificación del lapso del nombramiento hasta su renuncia o desvinculación; certificara las pólizas que de conformidad con la ley aportaron para su nombramiento; y, certificara en la actualidad quien funge como depositario para el inmueble ubicado en la Diagonal 50ª Nro. 15 A-0, identificado con matrícula inmobiliaria número 01N-154887.

Aunque en un primer momento fueron decretadas la totalidad de las pruebas peticionado por la sociedad demandada, ante el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la entidad ejecutante, se negaron las dos pruebas antes descritas por proveído del nueve de diciembre de 2022.

Sostuvo el Juzgado que, cuando una parte pretenda valerse de una experticia para probar los supuestos de hecho que alega, debe aportarla en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, sin embargo, como al momento de proponer excepciones contra el mandamiento ejecutivo no aportó el dictamen requerido como prueba, no era procedente su decreto.

Respecto de la prueba encaminada a que se oficiara a la Sociedad de Activos Especiales SAE, arguyó que, como desde la presentación de la demanda o su contestación no se demostró sumariamente que se había agotado el respectivo derecho de petición con el fin de obtener la información requerida, tal y como lo establece el artículo 173 del C. General del Proceso, era inadmisibles disponer la misma.

3.- La apelación. Contra esta decisión el apoderado de la ejecutada interpuso recurso de apelación, quien después de realizar un recuento pormenorizado del proceso, expuso lo siguiente:

“...dicho auto que cercena y corta de tajo las pruebas solicitadas por la demandada constituye una sanción, una pena, es decir, no se estudió todo el contexto de la solicitud de las pruebas y para que se imponga una sanción de esta naturaleza aduciendo que no se llenaron los requisitos legales es completamente ilegal ya que una sanción de esta naturaleza no está prevista legalmente. Igualmente desde el punto de vista estructural del artículo 372 C.G. del Proceso la etapa probatoria no ha iniciado y por ende no se han establecido a ciencia cierta los argumentos de sustentación para que el juez opte por tenerlas en cuenta o no, por último en cuanto a la prueba pericial solicitada reposa o debió reposar en el proceso de restitución de inmueble que fuera objeto la demandada la cual nunca fue escuchada por estar en mora de los cánones de arrendamiento, toda vez que si los estaba pagando en un 50% tal como la facultaba el contrato de arrendamiento y que para este proceso se pidió la prueba trasladada situación que era muy simple en requerir el perito evaluador y que rindiera su informe, por lo anteriormente expuesto solicito al honorable tribunal superior revoque el auto del 9 de diciembre de 2022 por el cual se repuso parcialmente el auto que fijaba nueva fecha de audiencia y decreto de pruebas...”

4.- Objeto de la decisión en segunda instancia. El vocero judicial de la demandada interpuso recurso de apelación, sin embargo, ningún argumento presentó frente a la negativa de la práctica de las pruebas. Sus afirmaciones se enfilaron a señalar que el auto que negó la práctica de las pruebas le estaba imponiendo una sanción que no se encontraba prevista en la ley.

El recurso se concedió en el efecto devolutivo por parte del juzgado de primer grado mediante auto del 17 de enero de 2023. (PDF.0030. AutoConcedeApelacion).

CONSIDERACIONES

1.- En el Código General del Proceso, los medios de impugnación se encuentran contemplados a partir del artículo 318. De ese conjunto de normas se desprenden los requisitos indispensables para la viabilidad de todo recurso, entre ellos, los siguientes: a) capacidad para interponer el recurso; b) interés para recurrir; c) oportunidad del recurso; d) procedencia del recurso; e) motivación de los recursos y e) observancia de las cargas procesales.

En relación con el quinto de los requisitos, dice el Dr. Hernán Fabio López Blanco:

“Al observar las diversas clases de recursos se observa que todos deben ser motivados, es decir, que no basta el deseo de la parte de recurrir de una determinada providencia, sino que debe indicar el porqué de su inconformidad debidamente fundamentada(....)

(...) en suma, ha sido criterio de nuestro legislador no dejar en un plano puramente hipotético saber cuál es el motivo del desacuerdo que se tiene para con determinada providencia, con el fin de que el recurrente oriente con una serie de argumentaciones la labor de estudio de las peticiones hechas al juez”¹

2.- En el sub lite, la compañía Proyectos Negocios y Bienes S.A.S. censuró vía apelación el auto proferido el nueve de diciembre de 2022, a través del cual se negó la práctica de una prueba pericial, encaminada al avalúo de unas mejoras realizadas en el predio ocupado en arrendamiento, y de oficiar a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para que certificara la designación de los depositarios del bien y las pólizas que estos aportaron para llevarse a cabo su nombramiento.

En efecto, el impugnante, a pesar de exteriorizar inconformidad con la negativa de las práctica de las referidas pruebas por él solicitadas, en los argumentos señalados al momento de interponer el recurso de alzada, omitió expresar los aspectos puntuales y concretos que deben soportar las razones de disenso contra la providencia; que en tratándose del rechazo de pruebas por extemporáneas, tenían que ir encaminados a controvertir ésta, vale decir, a comprobar que su aportación o petición resulta oportuna y conducente, conforme a lo dispuesto en los artículos 173 y 227 del C. General del Proceso.

Frente al punto concreto del rechazo de las pruebas por extemporaneidad,

¹ Código General del Proceso, Parte General, DUPRE Editores, edición 2017, página 775.

el apoderado se limitó a indicar de manera literal que: *“...no se estudió todo el contexto de la solicitud de las pruebas y para que se imponga una sanción de esta naturaleza aduciendo que no se llenaron los requisitos legales es completamente ilegal ya que una sanción de esta naturaleza no está prevista legalmente. Igualmente desde el punto de vista estructural del artículo 372 C.G. del Proceso la etapa probatoria no ha iniciado y por ende no se han establecido a ciencia cierta los argumentos de sustentación para que el juez opte por tenerlas en cuenta o no...”*.

Tal argumento no refuta las explicaciones dadas por el Juzgador para la decisión que tomó, es decir, no rebate de ninguna manera los fundamentos de la decisión de primer grado, como lo es su obligación, motivar el desacuerdo con el proveído, de manera que en sede de segunda instancia se tenga claro el objeto de estudio. Es decir, nada explica el recurrente sobre las razones por las cuales no allegó la prueba pericial con el escrito de excepciones, tal y como lo exige el artículo 227 del C. General del Proceso, así mismo, porque no pudo adquirir directamente o por medio de derecho de petición las certificaciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), es decir, si fue atendida o no su solicitud, realizando la acreditación correspondiente.

En sentir de la Sala, nada arguyó la parte demandada atinente la negativa de la práctica de las pruebas solicitadas por extemporáneas, la cual tuvo como fundamento el inciso 3º del artículo 173 y 227 del C. General del Proceso, que consagran:

*“...Art. 173...En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente...***

*Art. 227...**La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas...*** (Resalto intencional).

En otras palabras, se limitó el recurrente a indicar que la decisión del juzgado de conocimiento cercenó su derecho a la petición de pruebas, esto es, que se trató de una sanción sin el estudio del contexto de la solicitud, sin embargo, nada expresó sobre el puntual fundamento que se resaltó por el juzgado para la negativa de decretar las pruebas deprecadas, conforme a la normativa transcrita.

3.- Ahora bien, el canon 322, numeral 3, inciso 4, del C. General del Proceso, consagra que la decisión de declarar desierta una alzada, interpuesta frente a un auto, es del resorte del juez de primer grado. Sin embargo, tal pauta no impide que igual decisión sea adoptada por el juzgador de segunda instancia, en manera similar a los que acontece con la apelación de sentencias.

Es decir, el superior tiene competencia funcional para resolver el recurso, e igualmente para verificar si es procedente, es decir, si el impugnante tiene interés para recurrir, si lo hizo a tiempo, y si lo sustentó, de manera que, en este caso, en el cual no se observa una sustentación adecuada y congruente del recurso, deba declararse desierta la alzada.

En suma, la falencia en comentario comporta que el recurso sea ineficaz y no pueda ser decidido. En consecuencia, se impone declararlo desierto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **DECLARA DESIERTO** el recurso de apelación interpuesto por PROYECTOS NEGOCIOS Y BIENES S.A.S., frente a la decisión por medio de la cual negó la práctica de pruebas, en el interior del proceso Ejecutivo instaurado por C.I.U Colombiana S.A. en contra de Proyectos Negocios y Bienes S.A.S.

Comuníquese lo aquí decidido al juzgado de primera instancia, en los términos del inciso segundo del artículo 326 del C. General del Proceso, e incorpórese al expediente que se encuentra surtiendo recurso de apelación de la sentencia en este Despacho.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022